

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Santiago de Compostela de que a administración ten a obriga de resolver de forma expresa e nos prazos establecidos reclamacións e peticións.

Expediente: L.4.Q/12515/22

Santiago de Compostela, 8 de marzo de 2023

Sr. Alcalde:

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, comparece solicitando a nosa intervención don XXX.

ANTECEDENTES

No seu escrito, esencialmente, indícanos que

Solicitou o pasado 24/11/2022 ao Concello de Santiago a resolución ao recurso de alegacións presentado no seu rexistro o día 4/11/2021(rexistro XXX) tras ser a miña persoa obxecto de denuncia con expediente XXX e sendo embargado en Xuño do presente ano pola Deputación da Coruña por un importe de 243,45€ sen existir dita resolución ao recurso de alegacións, pónome en contacto telefónico con dito Concello para informarme sobre a evolución do proceso e a súa resposta é que teñen un prazo de ata catro anos para responder á miña solicitude de un documento que debería existir antes de ser executado dito embargo

Ante iso requirimos, con data 27/12/2022, sendos informes a ese Concello e á Deputación da Coruña. A día de hoxe o Concello non ten respondido ao noso requirimento. Pola súa banda, a Deputación da Coruña achegou informe co seguinte contido:

PRIMERO.- De lo indicado en los recursos presentados en fechas 14/06/2022, 05/08/2022 y 18/10/2022 se deduce que el recurrente alega, en síntesis, lo siguiente:

- Que se le ha embargado su cuenta, por importe de 243,45 euros, en relación a una multa de tráfico del Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
- Que en fecha 04/11/2021 presentó alegaciones a dicha multa en el citado Ayuntamiento y no le fue notificada la contestación a las mismas.

Por lo expuesto, solicita la devolución de la cantidad embargada.

SEGUNDO.- A la vista de las alegaciones del recurrente, se solicitó informe en fecha 16/06/2022, por parte de la Sección de Revisión del Servicio Provincial de Recaudación, al Departamento de Multas del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Dicha solicitud de informe fue reiterada el 17/11/2022.

A fecha 28/11/2022 no consta en esta Diputación Provincial que el citado Departamento de Multas del Ayuntamiento de Santiago de Compostela haya emitido el informe solicitado.

TERCERO.- Finalizado el período voluntario de pago de la sanción, sin haber realizado el ingreso de la misma, dicha sanción se elevó a ejecutiva y se dictó la providencia de apremio, la cual se intentó notificar al recurrente, por parte del Servicio de Correos, a las 09:37 horas y a las 16:52 horas de los días 02/03/2022 y 03/03/2022, respectivamente, en la dirección que constaba en esta Administración: CL XXX BENASQUE (HUESCA). Tras los intentos infructuosos de notificación, con el resultado de "ausente", se procedió a la publicación en el BOE número 78, de fecha 01/04/2022, del correspondiente anuncio para notificación, por comparecencia, de la providencia de apremio. Al no haberse producido dicha comparecencia, se dio por notificado el citado documento en fecha 17/04/2022.

CUARTO.- Según los datos obrantes en esta Diputación Provincial a fecha 28/11/2022, la liquidación en cuestión con nº de valor XXX consta ingresada mediante embargo, con fecha de la traba a 31/05/2022

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 7.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL), señala que:

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las Entidades locales podrán delegar en la Comunidad Autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias que esta Ley les atribuye.

Asimismo, las entidades locales podrán delegar en la Comunidad Autónoma o en otras Entidades Locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los restantes ingresos de Derecho Público que les correspondan."

En este sentido, al haber delegado la entidad titular del ingreso de derecho público (Ayuntamiento de Santiago de Compostela), en esta Diputación Provincial, las competencias que la Ley le atribuye en materia recaudatoria, esta Corporación es competente para el conocimiento y resolución de la cuestión planteada por el recurrente.

SEGUNDO.- El artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT) señala:

"1. Los recargos del período ejecutivo se devengan con el inicio de dicho período, de acuerdo con lo establecido en el artículo 161 de esta ley. Los recargos del periodo ejecutivo son de tres tipos: recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido y recargo de apremio ordinario. Dichos recargos son incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario.

2. El recargo ejecutivo será del cinco % y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio.

3. El recargo de apremio reducido será del 10 % y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 de esta ley para las deudas apremiadas.

4. El recargo de apremio ordinario será del 20 % y será aplicable cuando no concurren las circunstancias a las que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo.

5. El recargo de apremio ordinario es compatible con los intereses de demora. Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.

6. No se devengarán los recargos del periodo ejecutivo en el caso de deudas de titularidad de otros Estados o de entidades internacionales o supranacionales cuya actuación recaudatoria se realice en el marco de la asistencia mutua, salvo que la normativa sobre dicha asistencia establezca otra cosa."

TERCERO.- El artículo 79 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP, en adelante) señala:

"1. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos.

2. En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita." El artículo 80.4 de la citada LPACAP dispone:

"Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido, se podrán proseguir las actuaciones.

El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución."

De acuerdo con lo señalado en los artículos indicados, y teniendo en cuenta que a fecha 28/11/2022 no existe constancia en esta Administración de la emisión del citado informe solicitado al Departamento de Multas del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, se concluye que no se aprecia la concurrencia de ninguno de los motivos tasados de oposición ala diligencia de embargo de entre los previstos en el artículo 170.3 de la LGT que dispone lo siguiente:

"Contra la diligencia de embargo sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:

- a) Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
- b) Falta de notificación de la providencia de apremio.
- c) Incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en esta ley.
- d) Suspensión del procedimiento de recaudación."

No obstante, si por parte del Ayuntamiento de Santiago de Compostela (en cuanto Organismo competente para determinar si la liquidación ha sido correctamente practicada y notificada) fuese comunicada cualquier rectificación o anulación al respecto, por parte de esta Diputación se realizarían las actuaciones oportunas.

Por todo lo expuesto,

RESUELVO:

- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. XXX.

De conformidad con lo previsto en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo competente, el recurso contencioso-administrativo. El plazo para su interposición será de dos meses, que se contarán desde el día siguiente al de su notificación. No obstante, si lo considera conveniente, puede utilizar y ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Segundo nos informa o interesado, esta resolución foille remitida e accedeu ao contido da mesma o día 21/12/2022.

ANÁLISE

Á vista do contido do escrito de queixa, da documentación achegada pola persoa que promoveu este expediente e do que se manifesta no informe da Administración, é preciso facer as seguintes consideracións:

PRIMEIRA. A queixa trae causa da non resposta, por parte dese Concello, ás alegacións presentadas polo interesado en data 04/11/2021, diante da sanción imposta por ese Concello substanciada no expediente 2021/41144. Ditas alegacións foron rexistradas con número XXX na data indicada ás 11.07 horas.

Diante do silencio desa Administración, o interesado solicitou resolución expresa das mesmas o día 24/11/2022 ás 11:23 horas, con número de rexistro XXX. O interesado aporta copia de ambos documentos.

SEGUNDO. En xuño do ano 2022, o interesado recibiu notificación de embargo por parte da Deputación da Coruña, administración na que ten delegada o Concello de Santiago as competencias que a lei lle outorga en materia recadatoria. O interesado presentou recursos diante da Deputación provincial da Coruña nas datas que figuran no informe transcrito do Ente provincial.

Segundo informa a Deputación, á vista destas alegacións, solicitou informe ao Concello de Santiago en data 16/06/2022 e, á data da resolución dos recursos presentados polo interesado, non recibira resposta algunha por parte desa Administración.

TERCEIRO. O artigo 103 da Constitución Española como o artigo 3 da Lei 40/2015, o 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público establecen que a Administración Pública serve con obxectividade os intereses xerais e actúa con sometemento pleno á Lei e ao Dereito. Pola súa banda o artigo 29 da xa citada Lei 39/2015, de 1 de outubro, establece que os termos e prazos establecidos nesa e noutras leis obrigan ás autoridades e persoal ao servizo das Administracións Públicas competentes para a tramitación dos asuntos .

O artigo 21 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, regula a obriga da Administración de resolver: “A Administración está obrigada a ditar resolución expresa e a notificala en todos os procedementos calquera que sexa a súa forma de iniciación”

En canto ao artigo 24.2 sinala: “(...) A desestimación por silencio administrativo ten os únicos efectos de permitir aos interesados a interposición do recurso administrativo ou contencioso-administrativo que resulte procedente”

Con todo, convén non esquecer que a solución do silencio administrativo non constitúe unha actuación lexítima da Administración senón unha *fictio iuris* para dotar de seguridade xurídica ao administrado diante da non resposta da primeira. Nese sentido, a Sala 3ª do Tribunal Supremo en Sentencia núm. 586/2020, do 20 de maio cualifica o silencio administrativo como unha “patoloxía” da Administración Pública e como unha práctica “non por estendida menos aberrante”. A maiores, considera o silencio administrativo, non “como unha opción administrativa lexítima” que permite á Administración “contestar ou non segundo lle praza ou lle conveña”, senón como “unha infracción dos deberes esenciais da Administración”.

Debemos lembrar que o marco xurídico vixente configura un sistema de garantías da cidadanía e, nomeadamente, das persoas interesadas nun procedemento, na súa relación coa Administración que descansa sobre mecanismos de participación, cuxa finalidade responde a facer compatible a actuación eficaz da Administración co exercicio dos dereitos de cidadanía e, en consecuencia, ese sistema debe responder á súa propia natureza garantista, o que conleva a necesidade de resolver expresamente, como regra xeral, as solicitudes e/ou recursos que se formulen e que esa resolución estea motivada e notificada aos interesados con indicación de si é ou non definitiva na vía administrativa e recursos e prazos que procedan para interpoñelos si fora o caso.

En calquera caso a Administración está obrigada a responder á cidadanía que acude a ela debendo ofrecerlle unha resposta por escrito que ademais sexa unha resposta directa, rápida, exacta e legal, fundada en tempo e forma adecuada ao procedemento que corresponda e congruente coas pretensións expresadas, todo elo con prontitude e sin demoras inxustificadas, dun xeito especial si, como vimos, a persoa ten a consideración de interesada no procedemento.

CONCLUSIÓN

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello o seguinte **recordatorio de deberes legais:**

A Administración ten a obriga de dar cumprimento ao recollido nos artigos 21 e 29 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, de resolver de forma expresa e nos prazos establecidos cantas solicitudes, reclamacións e recursos sexan presentados polos cidadáns.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución da Valedora do Pobo, e recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta Institución da



aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle efectividade, tamén se é o caso.

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluírase na páxina web da institución.

O principio de publicidade das resolucións desta institución refórzase no artigo 37 da Lei 6/1984, cando prevé que a Valedora do Pobo, no seu informe anual ao Parlamento de Galicia, dará conta do número e tipos de queixa presentadas; daquelas que foron rexeitadas e as súas causas, así como das que foron obxecto de investigación e o seu resultado, con especificación das suxestións ou recomendacións admitidas pola administración pública galega.

Saúdoo atentamente.

María Dolores Fernández Galiño
Valedora do Pobo